

Los investigadores del campus, en pie de guerra por la ley de contratos que para sus proyectos

- La norma impide a la Universidad gastar más de 15.000 euros anuales por proveedor, lo que complica las compras de material
- Los científicos piden que no se les aplique esa legislación



El salón del Edificio de Instituto de Investigación donde se celebró la asamblea se llenó. RAQUEL LABODÍA

«Después de 9 meses no tenemos espectrómetro»

ZARAGOZA. La ley está pensada fundamentalmente para contratos de obras y servicios de la administración pública y la investigación no responde a eso. Tendría que haber una aplicación específica de una ley de contratos para todo el tema de investigación. Que se ganen el sueldo los señores del Parlamento.

Esta es la queja que expresaba ayer Juan Ramón Castillo, impulsor del Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales (IUCA), que asistió ayer a la asamblea en el campus Río Ebro. Es investigador principal de dos proyectos europeos que, relató, llevan nueve meses de retraso ante

la imposibilidad de comprar un espectrómetro de masas «absolutamente imprescindible» para proseguir las tareas.

«Tenemos muchísimas dificultades para conseguir el material fungible y los reactivos. Desde el mes de octubre no hemos dejado de hacer papeles y papeles, pero no sabemos nada del espectrómetro. Empezamos en octubre, pero como eran fondos Feder nos los pararon porque se veía venir la ley de marzo», explicó Castillo. Asimismo alertó de que si antes del próximo octubre no tienen instalado este instrumento en la Universidad se generará un «gravísimo problema» y la única solución

será «pedir una prórroga de un año».

Uno de los proyectos que lidera este doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Zaragoza es Outbiotics, que se centra en eliminar o reducir considerablemente los antibióticos en las aguas de río. Para ello tienen que identificar la presencia de antibióticos en la margen izquierda del Ebro, el Cantábrico y la parte francesa de los Pirineos.

Otra investigadora principal de Outbiotics, Peña Ormad, puso otro ejemplo de las consecuen-

ZARAGOZA. Los investigadores del campus público de Zaragoza están en pie de guerra ante la nueva ley de contratos públicos que, denunciando, está retrasando y paralizando sus proyectos de investigación desde que entró en vigor el pasado marzo. El principal problema en estos momentos radica en que la normativa estatal fija a la Universidad de Zaragoza, como única unidad de gasto reconocida, un límite por proveedor de 15.000 euros anuales. Una cantidad que resulta insignificante si se tiene en cuenta que es para todos los grupos de investigación de la entidad académica. El malestar y la preocupación de este colectivo quedó patente ayer en una asamblea celebrada en el Edificio de Institutos de Investigación del campus Río Ebro, a la que asistieron unas 80 personas que llenaron el salón de actos.

Ante este y otros obstáculos administrativos y la sobrecarga burocrática que están «amordazando la investigación», los científicos aragoneses han lanzado un manifiesto en el que exigen al Gobierno de España que excluya «urgentemente» a estas actividades de la Ley estatal 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSPP).

Además, urgen al Gobierno autonómico, a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y al propio campus aragonés a demandar formalmente al nuevo Ejecutivo esta medida y a que hagan declaraciones públicas fijando sus posturas a este respecto. A la DGA le

reclaman también que utilice «urgentemente» su capacidad legislativa y reguladora para minimizar el impacto de la ley.

Los impulsores de esta declaración son, entre otros, el director del departamento de Bioquímica, Alberto Anel; su homólogo del Instituto en Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI), Javier Sancho; Jesús Santamaría, del Instituto de Nanociencia de Aragón (INA) y el investigador de la Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo (Araid) del BIFI, Adrián Velázquez. El escrito ha recabado unos 300 apoyos en las redes sociales y ayer lo suscribieron la práctica totalidad de los asistentes a la reunión.

Aunque es difícil concretar la cifra de investigadores o proyectos afectados, Anel recordó que en el campus trabajan unos 3.500 docentes e investigadores. En su última convocatoria, la DGA reconoció a 170 equipos investigadores de la Universidad. Los organizadores de esta movilización quieren alcanzar el millar de adhesiones de cara a septiembre y, según cómo evolucione este tema, no descartan adoptar medidas de presión más tajantes.

Favores de colegas extranjeros

Un pequeño respiro, aunque insuficiente, vendrá dado por la ampliación del límite de gasto a 50.000 euros por proveedor, que se espera entre en vigor en septiembre. El director del departamento de Bioquímica dijo que hay laboratorios «completamente paralizados» y que algunos investigadores han tenido que pedir favores a colegas de otros países para que les envíen reactivos y poder continuar con sus trabajos.

Adrián Velázquez dejó claro que están a favor de que haya un control, como el que ya existía, de los fondos públicos que manejan, pero que debe adecuarse a las características de su labor, como que ya había llegado al límite de los 15.000 euros. Para poder continuar tuvieron que recurrir a otro que lo adquiera al primero y el precio nos aumentó en un 50%, de 2.000 a 3.000 euros», manifestó. «Me parece una vergüenza tener que hacer este gasto extra y restarlo al final de otras partidas», criticó Ormad.

S. C. S. CAMPO



Juan Ramón Castillo. R. LABODÍA

cias de la aplicación de esta normativa. «El reactivo antibiótico que necesitamos no podemos comprarlo al suministrador habitual porque ya había llegado al límite de los 15.000 euros. Para poder continuar tuvimos que recurrir a otro que lo adquiera al primero y el precio nos aumentó en un 50%, de 2.000 a 3.000 euros», manifestó. «Me parece una vergüenza tener que hacer este gasto extra y restarlo al final de otras partidas», criticó Ormad.

S. C.

S. CAMPO

Temperaturas de hasta 35 °C en Veterinaria y otras facultades

ZARAGOZA. El calor ha llegado tarde pero está pegando fuerte. Lo están sufriendo las personas que estos días trabajan en las facultades de Veterinaria y Medicina de la Universidad de Zaragoza y el edificio de los servicios centrales donde, según denuncian, se superan los 30 grados centígrados y en algunas estancias se llega a los 35 °C. El motivo es que este año no se han instalado como en los anteriores a finales de mayo las enfriadoras de aire,

al parecer, por problemas en la licitación. Los afectados desconocen si el problema se solventará en las próximas semanas.

La Universidad de Zaragoza no ofreció ayer ninguna explicación acerca de esta situación. Sin embargo, si uno consulta en la página de la Oficina Verde del campus los horarios de aire acondicionado se especifica que en estos dependencias está activado el 'freecooling' (ventilación natural mecánica) de 6.00 a 9.00 y que es-

tán pendientes los trabajos de colocación del aire acondicionado en estas tres dependencias mencionadas.

Investigadores de la Facultad de Veterinaria han iniciado una recogida de firmas para manifestar su malestar en una carta dirigida al vicerrector de Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructuras del campus, Francisco Serón.

En la misiva, le reprochan que no se les ha informado en ningún momento sobre las razones del re-

traso en la instalación de los equipos de refrigeración y «qué medidas se están tomando para solucionar el problema». Asimismo, exigen que se busque una solución «aunque sea de forma temporal mientras la definitiva siga la vía administrativa» y que se pongan medidas para que este trance no vuelva a darse en el futuro.

Aunque las clases han terminado, tanto profesores, como investigadores y personal de administración y servicios siguen desarro-

llando su labor. La calorina resulta insostenible especialmente en los laboratorios a causa de la maquinaria y el instrumental. «Debido a las investigaciones que se encuentran ya en marcha, no es posible dejar de trabajar en los laboratorios o hacerlo solo a media jornada dependiendo del experimento, y las condiciones actuales están haciendo verdaderamente difícil el trabajar a jornada completa», explican en la carta.

S. C.